noviembre de 2020 en ella las partes llegaron a un acuerdo que fue analizado y acompañado por la Agente del Ministerio Público (Cd. 1, fl. 44).

El 30 de noviembre de 2020, se remitió el acuerdo para su estudio ante los Juzgados Administrativos de Facatativá (fl. 45).

FÓRMULA DE ARREGLO

El apoderado de la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, da lectura del Acta n.º 009 del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del hospital, en la que se decide proponer formula de arreglo, en el sentido de conciliar las sumas adeudadas, en los siguientes términos

“PRIMERA: Que se declare la existencia del contrato **OPS 194 del 14 de enero de 2020** firmado entre la anterior administración de la ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA y la empresa **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS “COMPROLAB SAS** y que, en virtud de la ejecución de dicho contrato que **contaba con disponibilidad presupuestal N° 255/20 al momento de su firma como consta en el mismo contrato Clausula -SEPTIMA-IMPUTACION PRESUPUESTAL** se declare que se generaron y no fueron pagadas en su momento las facturas 221-258 y 312.

SEGUNDA: Que se declare la existencia del contrato **OPS 267** del 30 de marzo de 2020 firmado entre la anterior administración de la ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA y la empresa **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS “COMPROLAB SAS** y que, en virtud de la ejecución de dicho contrato **que contaba con disponibilidad presupuestal N 495/20 al momento de su firma como consta en el mismo contrato Clausula-SEPTIMA-IMPUTACION PRESUPUESTAL**, se DECLARE que se generaron y no fueron pagadas en su momento las facturas: 858-850-863-905 y 909.

TERCERA: Que teniendo en cuenta la solicitud de la convocada en la audiencia del 19 de noviembre de 2020 y las sugerencias hechas por la señora Procuradora se tenga como pretensiones tercera que, las sumas reconocidas en el acta de conciliación que se aporta **junto con la certificación sobre valores por factora y valor total que se anexa expedida por el área correspondiente y que aclara que estas sumas y valores corresponden al capital neto a pagar** y con el compromiso de pago sin intereses comerciales ni moratorios durante los **TRES MESES** siguientes al fallo que homologue el acuerdo conciliatorio reduciéndose lo aprobado en el acta anterior en un 50% y para efectos de poder llegar al arreglo que se peticiona a la señora Procuradora”

Aunado a ello, el apoderado da lectura al certificado suscrito por la auxiliar administrativa del hospital, en el que se constata:

“El valor pendiente por cancelar asciende a la suma de **\$CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS (\$45.727.139)** M/Cte, después de los respectivos descuentos de retención, los cuales ya fueron girados en su momento por concepto de Ica Retenido.”

La anterior propuesta fue puesta a consideración de la convocada quien manifestó acoger la fórmula conciliatoria en todas sus partes.

Atendiendo a lo expuesto por las partes, la Procuradora procedió a evaluar el acuerdo, señaló que (i) contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, (ii) la eventual acción contenciosa no se encuentra caducada, (iii) el acuerdo versa sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes, (iv) las partes se encuentran debidamente representadas con capacidad para conciliar; (v) obran en el expediente pruebas que lo justifican; y precisó, que (vi) el acuerdo conciliatorio no es violatorio de la ley, ni lesiona el patrimonio público.

Sostuvo que, si bien el total de las facturas ascendía a una suma superior a la conciliada, al valor se debía realizar los descuentos y retenciones de ley. Además, aclaró que en un proceso judicial la suma que cancelaría la entidad sería superior, atendiendo la indexación y los intereses a los que hubiera lugar.

Por los anteriores motivos procedió a acompañar el acuerdo entre las partes.

CONSIDERACIONES

El art. 64 de la Ley 446 de 1998³ señala que el acuerdo conciliatorio “(...) es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador.” y recae sobre derechos susceptibles de ser conciliados o transigidos.

En dichos términos el Consejo de Estado⁴ ha definido los parámetros para el estudio de acuerdos conciliatorios, fijando puntos específicos que deben cumplirse para su aprobación, de la siguiente manera:

“En efecto, la conciliación en temas contenciosos administrativos procede únicamente respecto de conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que se conducen, en la jurisdicción, mediante las acciones de reparación directa, de controversias contractuales y de nulidad y restablecimiento del derecho⁵. De igual forma, los acuerdos

³ Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.

⁴ CE 3, 5 mar. 2015, e. 050012331000201200394 01, D. Rojas, en http://anterior.consejodeestado.gov.co/testmaster/nue_actua.asp?mindice=05001233100020120039401, pág. 6 y 7.

⁵ “La Conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, fue introducida en nuestra legislación por la Ley 23 de 1991, modificada por la Ley 446 de 1998 y desarrollada por la Ley 640 de 2001. Así en los procesos contenciosos administrativos sólo es procedente en los conflictos de carácter particular y contenido económico, es decir, aquellos que se tramiten en ejercicio de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del C.C.A., disposiciones que fueron recogidas en el Decreto 1818 de 1998. De conformidad con el tratamiento legal dado por nuestra legislación, el artículo 64 de la Ley 446 de 1998, enseña que la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador. A continuación, el artículo 65 señala que serán conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley. En términos

conciliatorios en los que participen entidades de carácter público, requieren, para que se hagan efectivos, ser previamente aprobados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con lo determinado por los artículos 37 y 43 de la Ley 640 de 2001.

Para dicho efecto, es necesario que aquellos cumplan con los siguientes requisitos: **(i) que la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Sección Tercera del Consejo de Estado sean competentes (artículos 82, 83, 129 y 132 del C.C.A., 70 y 73 de la Ley 446 de 1998); (ii) que no haya caducidad de la acción (artículo 44 de la Ley 446 de 1998); (iii) que las partes estén debidamente representadas y que se encuentren legitimadas (artículos 314, 633 y 1502 del C.C., 44 del C.P.C. y 149 del C.C.A.); y (iv) que existan pruebas suficientes de la responsabilidad de la demandada y que el acuerdo no sea violatorio de la ley ni lesivo para el patrimonio del Estado (artículo 65A de la Ley 23 de 1991 y 73 de la Ley 446 de 1998).**

(...)” (Negrilla fuera de texto).

Para la verificación de los supuestos, y de allí la aprobación o improbación de la conciliación prejudicial lograda entre las partes, procede el Despacho a centrar su análisis en los requisitos citados previamente.

1. COMPETENCIA DEL JUZGADO

La Ley 640 de 2001 en su art. 24 establece:

“Artículo 24. Aprobación judicial de conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo. las actas que contengan conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo se remitirán a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al de su celebración, al juez o corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que imparta su aprobación o improbación. El auto aprobatorio no será consultable.”

La competencia para el análisis de los asuntos asignados a estos Despachos se determina en razón del territorio y de la cuantía. En tal sentido, al ser una conciliación que procura el pago de unas facturas por servicios prestados a la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, la cual se encuentra dentro de la competencia territorial fijada para este Despacho mediante Acuerdo n.º PSAA06 – 3321 de 2006, art. 1º, num. 14, lit. b, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y al tener una cuantía inferior a quinientos (500) SMLMV, conforme a lo dispuesto en el numeral 5º del art. 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437 de 2011, se concluye que este Juzgado es competente para el estudio del presente acuerdo.

similares el artículo 19 de la Ley 640 de 2001 prevé que se podrán conciliar todas las materias susceptibles de transacción, desistimiento y conciliación ante los conciliadores de los centros de conciliación, los servidores públicos facultados para conciliar y ante los notarios”. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 3 de marzo de 2005, exp. 2002-00961 (23875), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

2. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL

Al respecto, el lit. j) del num. 2) del art. 164 de la L.1437/2011, establece que en asuntos relacionados con el medio de control de Controversias Contractuales se tendrá el término dos años para promoverlo contado desde, tratando de aquellos contratos que deben ser liquidados, en los dos meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente, en este caso, se encuentra que el suministro de materiales se llevó a cabo con ocasión de las órdenes de suministros nos.º 194 y 267 de 2020, que establecía que la liquidación bilateral debía realizarse dentro de los 4 meses siguientes desde la terminación del contrato.

En dichos términos, se concluye que no ha operado el fenómeno de la caducidad, toda vez que no han transcurrido dos años y cuatro meses a partir del día siguiente a la terminación de cada contrato plasmado en las órdenes de suministro.

3. DEBIDA REPRESENTACIÓN Y LEGITIMACIÓN DE LAS PARTES.

De los documentos allegados por la Procuraduría, se establece que tanto la convocante como la convocado estuvieron representados para la conciliación por profesionales del derecho a quienes se les otorgó la facultad de conciliar en los respectivos poderes y cada uno de los convocados acredita, también, las calidades en las que dicen actuar (fls. 6 y Cd. 1 fl. 44).

4. QUE EXISTAN PRUEBAS SUFICIENTES DE LA RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCADA Y QUE EL ACUERDO NO SEA VIOLATORIO DE LA LEY NI LESIVO PARA EL PATRIMONIO DEL ESTADO.

De los documentos dispuestos para estudio se establece que la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, presentó solicitud para que se llevara a cabo conciliación extrajudicial, con el objeto de llegar a un acuerdo frente a lo adeudado por el suministro de materiales para laboratorio de las órdenes de suministro nos. 195 y 267 de 2020, que se encuentran soportados en las facturas nos.º 221 de 12 de febrero de 2020, 258 de 13 de febrero de 2020, 312 de 18 de marzo de 2020, 858 y 860 de 8 de abril de 2020, 863 de 13 de abril de 2020, 905 de 17 de abril de 2020 y 909 de 20 de abril de 2020, por un valor total de \$45.727.139 pesos M/cte. (fls. 2 y 11vto.-12).

Al respecto, sea lo primero recordar que las Empresas Sociales del Estado son definidas, por la Ley 100 de 1993⁶, como entidades públicas especiales de carácter descentralizado, poseedoras de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyo objeto se circunscribe a la prestación de los servicios de salud; no obstante, aun con su naturaleza, evidentemente pública, en lo que respecta al régimen contractual se rige por normas de derecho privado con la facultad discrecional de utilizar las cláusulas exorbitantes del estatuto general de la contratación de la administración pública.

⁶ Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones

Así, por tratarse de una de las entidades excluidas del estatuto general de contratación de la administración pública resulta aplicable lo previsto en el art. 13 de la Ley 1150 de 2007⁷, que advierte sobre su deber de emplear, en el régimen contractual especial, los principios de la función administrativa y la gestión fiscal de los arts. 209 y 267 de la Constitución

En este mismo sentido, el art. 76 de la Ley 1438 de 2011⁸, en aras de garantizar la eficiencia y transparencia en la contratación de las E.S.E., autorizó el uso de cualquier mecanismo que beneficiara a la entidad con economías de escala, calidad, oportunidad y eficiencia, siempre que se respetaran los principios de la actuación administrativa y la contratación pública.

En el caso bajo estudio, revisado el expediente, se encuentran elementos para estimar probados los siguientes hechos:

La Orden de Suministro n.º 194 de 2020, suscrita por la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta y Comprolab S.A.S., tuvo por objeto el suministro de materiales para el laboratorio clínico, por un término de ejecución de dos meses, respaldada con certificado de disponibilidad presupuestal n.º 255 de 14 de enero de 2020 (fls. 19-24)

Durante la vigencia de la Orden, se expidieron las facturas: n.º 221 de 12 de febrero de 2020, respaldada en el comprobante de ingreso n.º 5029 de 18 de abril de 2020, con valor a pagar de \$3.042.270 (fls. 30 vto-31); n.º 258 de 13 de febrero de 2020, respaldada en el comprobante de ingreso n.º 5030 de 18 de abril de 2020, con valor a pagar de \$2.335.047(fl. 32); n.º 312 de 18 de febrero de 2020, respaldada en el comprobante de ingreso n.º 5031 de 18 de abril de 2020, con valor a pagar de \$462.295

La Orden de Suministro n.º 267 de 2020, suscrita por la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta y Comprolab S.A.S., tuvo por objeto el suministro de materiales para laboratorios, por un término de ejecución de seis meses, respaldada con certificado de disponibilidad presupuestal n.º 495 de 30 de marzo de 2020 (fls. 24 vto.-29).

Durante la vigencia de la Orden, se expidieron las facturas: n.º 858 de 8 de abril de 2020, respaldada en el comprobante de ingreso n.º 5068 de 23 de abril de 2020, con valor a pagar de \$2.566.620 (fl. 34); n.º 860 de 8 de abril de 2020, respaldada en el comprobante de ingreso n.º 5069 de 23 de abril de 2020, con valor a pagar de \$32.416.749(fl. 35-38); n.º 863 de 13 de abril de 2020, respaldada en el comprobante de ingreso n.º 5070 de 23 de abril de 2020, con valor a pagar de \$928.522 (fls. 38 vto.-39); n.º 905 de 17 de abril de 2020, respaldada en el comprobante de ingreso n.º 5071 de 23 de abril de 2020, con valor a pagar de \$1.554.549 (fls. 39 vto.-40); n.º

⁷ Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.

⁸ Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

909 de 20 de abril de 2020, respaldada en el comprobante de ingreso n.º 5072 de 23 de abril de 2020, con valor a pagar de \$2.800.475 (fls. 40 vto.-41).

En el Acta n.º 005 del 6 de octubre de 2020 del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, se decide presentar solicitud de conciliación, afirmando que es para *“efectos de saldar toda deuda con la sociedad COMPROLAB debido a una serie de vacíos encontrados con ocasión de lo adeudado por la administración anterior y que no formo parte del informe de gestión en la entrega de cargo de la Gerencia el pasado mes de mayo de 2020”* (fls. 6 vto-7), señalando respecto al valor adeudado lo siguiente:

“Se estima la pretensión en CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$46.106.527) M/CTE., sin embargo, una vez descontados el valor de impuesto ICA retenido y girado al Municipio de Villeta; el valor definitivo o liquidado a pagar corresponde a CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS (45.727.139)”

En este mismo sentido, en el certificado suscrito por la auxiliar administrativa del hospital, allegado junto al Acta n.º 009 del 25 de noviembre de 2020, se constata que el valor pendiente por pagar de las facturas nos. 221, 258, 312, 863, 909, 858, 860 y 905, asciende a \$45.727.139 (Cd. 1 a folio 44)

Conforme a lo expuesto, se concluye que el acuerdo de conciliación por medio del cual la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta realiza el reconocimiento y pago de las facturas nos.º 221, 258, 312, 858, 860, 863, 905 y 909, no es violatorio de la ley, como quiera que las misma se efectúa dentro de los parámetros establecidos por las OPS nos.º 1954 del 14 de enero de 2020 y 267 del 30 de marzo de 2020, suscrito por las partes, esto es en ultimas, el cumplimiento de una obligación surgida por mutuo acuerdo de las partes.

El acuerdo tampoco resulta lesivo a los intereses de la parte convocante, pues la liquidación aportada por la entidad, se encuentra acorde con lo establecido por la ley y, de la misma forma como la Procuradora delegada señaló, la suma reconocida por el acuerdo resulta menor al valor al que posiblemente hubiera sido condenada la entidad dentro de un proceso judicial, atendiendo a los intereses generados.

De acuerdo con lo expuesto, es procedente dar aprobación al acuerdo conciliatorio contenido en el acta de 27 de noviembre de 2020, logrado ante la Procuraduría 198 Judicial I Administrativa para los juzgados administrativos de Facatativá.

En mérito de lo expuesto, el Juez Primero Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá,

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la conciliación extrajudicial llevada a cabo el 27 de noviembre de 2020 con radicado 3467-2020, lograda ante la Procuraduría 198 Judicial I Administrativa para los juzgados administrativos de Facatativá.

SEGUNDO: EXPÍDANSE, para las partes, copias de la presente providencia y del acta de conciliación objeto de aprobación, atendiendo lo previsto en el artículo 114 del Código General del Proceso.

TERCERO: DEVUÉLVANSE los anexos a las partes interesadas, sin necesidad de desglose.

CUARTO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
MAURICIO LEGARDA NARVÁEZ
JUEZ

-001-I-000-

Firmado Por:

ELKIN MAURICIO LEGARDA NARVAEZ
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE FACATATIVA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

cd6dc241cc2e5dcfeb5c95fd3ff0673b80c6f283056c78f3a21623bed15f
508f

Documento generado en 22/04/2021 12:16:26 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>